



DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN

Guía de Asociaciones Público-Privadas

Elegibilidad de una Iniciativa Privada

Tabla de Contenido

2. NOTA TÉCNICA 8. Elegibilidad de una Iniciativa Privada	5
2.1. Introducción.....	5
2.2. Etapas del proceso de análisis de una APP de Iniciativa Privada.....	7
2.2.1. Etapa de evaluación preliminar – Prefactibilidad del proyecto	8
2.2.2. Etapa de estudios de factibilidad del proyecto	10
2.3. Pasos por seguir en proyectos de iniciativa privada.....	13

Índice de Ilustraciones

Ilustración 1. Retos que enfrentan las entidades públicas en el proceso de validación de una APP	6
Ilustración 2. Actividades de una Iniciativa Privada	7
Ilustración 3 Motivos o causales de rechazo de iniciativas privadas	8

Acrónimos

APP

Asociación Pública Privado

CONPES

Consejo Nacional de Política Económica y Social

RUAPP

Registro Único de Asociaciones Público-Privadas

SECOP

Sistema Electrónico De Compras Públicas

SMLMV

Salario Mínimo Legal Mensual Vigente

Glosario

A

Asignación de riesgos

Atribuir cada riesgo a la parte que esté en mejor capacidad de administrarlos, buscando mitigar el impacto que la ocurrencia de estos puedan generar sobre la disponibilidad de la infraestructura y la calidad del servicio.

Asociaciones Público-Privadas – APP

De acuerdo con el artículo 1 de la Ley 1508 de 2012, las APP *“son un instrumento de vinculación de capital privado, que se materializan en un contrato entre una entidad estatal y una persona natural o jurídica de derecho privado, para la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados, que involucra la retención y transferencia de riesgos entre las partes y mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura y/o servicio”*.

B

Beneficio

Es la riqueza en el ámbito social, ambiental o económico que obtiene la población objetivo en el momento que se decide ejecutar un proyecto de inversión. La valoración de beneficios depende de la identificación de los problemas resueltos y su descripción tiene que ver con

el impacto o los fines que tiene la utilización de los bienes producidos. Los beneficios son de carácter cualitativo y cuantitativo y se presentan bajo la forma del problema resuelto o la necesidad satisfecha.

I

Impacto

El cambio logrado en las condiciones económicas o sociales de la población, como resultado de los productos y resultados obtenidos con el proyecto o programa. Se trata del nivel más elevado de resultados o de la finalidad última de los proyectos, cuando se genera la totalidad de los beneficios previstos en su operación.

Iniciativa privada

Propuesta hecha por un privado para emprender un proyecto en lugar de responder a una solicitud del gobierno.

R

Riesgo

Eventos inciertos que pueden llegar a suceder en el futuro, dentro del horizonte de ejecución del proyecto y representarán efectos de diferente magnitud en uno o más de sus objetivos.

2. NOTA TÉCNICA 8. Elegibilidad de una Iniciativa Privada

2.1. Introducción

La Ley 1508 de 2012 -incluyendo sus modificaciones y otras disposiciones complementarias contenidas en las Leyes 1753 de 2015 y 1882 de 2018-, el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional 1082 de 2015 y sus modificaciones, y el Decreto 438 de 2021 -Por el cual se modifica el Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional-, constituyen el régimen jurídico de las Asociaciones Público-Privadas -APP-.

Este régimen se complementa a su vez con las normas que integran el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, el régimen de Obligaciones Contingentes de las Entidades Estatales de acuerdo con la Ley 448 de 1998 y su reglamentación contenida en el Decreto Único Reglamentario del Sector de Hacienda y Crédito Público 1068 de 2015, las disposiciones legales y reglamentarias que integran los regímenes sectoriales aplicables a los proyectos en atención al tipo de inversión de que se trate, las Resoluciones No. 3656 de 2012 y 1464 de 2016, expedidas por el Departamento Nacional de Planeación-DNP, entre otras disposiciones aplicables.

De acuerdo con el artículo 1 de la Ley 1508 de 2012, las Asociaciones Público-Privadas, (de ahora en adelante APP) son un instrumento de vinculación de capital privado para la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados, que involucran la retención y transferencia de riesgos entre las partes y mecanismos de pago relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura y/o servicio, que se materializan en un contrato entre una entidad estatal y una persona natural o jurídica de derecho privado.

La citada Ley y su reglamentación regulan dos formas de proyectos de APP: la iniciativa pública y la iniciativa privada.

Los proyectos de APP de iniciativa pública son aquellos en los cuales la entidad estatal identifica una necesidad susceptible de ser cubierta y estructura el proyecto de infraestructura y sus servicios relacionados. Una vez cumplidos ciertos requisitos, la entidad estatal invita a personas naturales o jurídicas de derecho privado a participar en el proceso de selección del contratista que se encargará bien sea del diseño y construcción de una infraestructura y sus servicios asociados, o de su construcción, reparación, mejoramiento o equipamiento, actividades todas estas que deberán involucrar la operación y mantenimiento de dicha infraestructura.

Por su parte, los proyectos de APP de iniciativa privada son los sometidos a consideración de la entidad estatal competente por un particular para que aquella tome las decisiones en las etapas de prefactibilidad y factibilidad reguladas en la Ley 1508 de 2012 y su reglamentación, y disponga los actos previos a la celebración de los contratos bajo el esquema de APP.

Los proyectos de APP de iniciativas privadas, por sus características, requieren un proceso diferente para su evaluación y contratación, a pesar de compartir similitudes con la APP de

iniciativa pública en las etapas de estructuración, diseño, construcción, operación y mantenimiento.

Dentro de los principales retos que enfrentan las entidades públicas en el proceso de validación de una APP de iniciativa privada se encuentra:

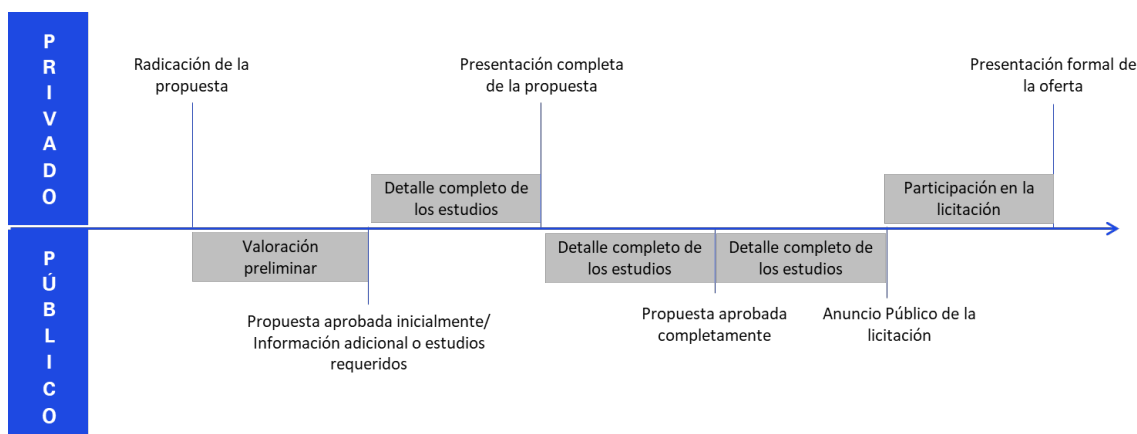
Ilustración 1. Retos que enfrentan las entidades públicas en el proceso de validación de una APP



2.2. Etapas del proceso de análisis de una APP de Iniciativa Privada

La principal diferencia en las etapas de una APP de Iniciativa Privada radica en que las tareas de elegibilidad y estructuración del proyecto se dividen entre el **proponente privado** (originador) y la **entidad pública**, el último participa como un evaluador de la calidad de los documentos que el originador realiza por lo cual debe tener unos principios claros bajo los cuales emitir su concepto. A continuación, se evidencian las actividades a ejecutar por cada una de las partes:

Ilustración 2. Actividades de una Iniciativa Privada



La ley es clara en disponer que todas las interacciones que se realicen entre eventuales socios privados y públicos durante el periodo de estructuración de una iniciativa privada no conlleven la aprobación de la iniciativa. Todos los costos implícitos en el desarrollo de la iniciativa tanto en etapa de prefactibilidad, como de factibilidad serán sufragados exclusivamente por el originador de la propuesta. Adicionalmente, si la propuesta es rechazada por la entidad pública en cualquier etapa, esta no tiene ningún tipo de obligación frente al proponente. Solo si la entidad pública considera voluntariamente que los estudios realizados son de su interés en el marco de sus funciones podrá realizar negociaciones para adquirirlos.

En los proyectos de Asociación Público-Privada existen mecanismos de confidencialidad que garantizan la reserva de la información financiera de los proyectos a implementar bajo este esquema. En las iniciativas privadas, la información relevante del proyecto remitido por el originador privado es de carácter confidencial, al igual que los análisis financieros realizados por la entidad pública a cargo del proyecto.

No obstante, existe información no confidencial de los proyectos, la cual se encuentra incluida en el Registro Único de Asociación Público Privada – RUAPP, registro que deberá hacerse a través del medio electrónico establecido por el Departamento Nacional de Planeación, la entidad estatal continuará encargada de registrar los proyectos de Asociación Público Privada de iniciativa privada en el RUAPP dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del proyecto. Se precisa que se puede acceder a este registro a través de la página web del departamento Nacional de Planeación (www.dnp.gov.co), opción “APP Asociaciones Público-Privadas” o directamente través de la URL: [RUAPP - Inicio de Sesión \(dnp.gov.co\)](http://RUAPP-Inicio%20de%20Sesi%C3%B3n.dnp.gov.co)

2.2.1. Etapa de evaluación preliminar – Prefactibilidad del proyecto

El objetivo de esta etapa consiste en proponer, cuantificar y comparar alternativas técnicas que permitirán analizar la viabilidad del proyecto. En esta, el originador privado presenta a consideración de la entidad pública competente una versión preliminar del proyecto sugerido para que la entidad evalúe bajo los siguientes criterios de elegibilidad la conveniencia del proyecto, los cuales se constituyen en motivos o causales de rechazo de dichas iniciativas:

Ilustración 3 Motivos o causales de rechazo de iniciativas privadas

Motivos o causales de rechazo

Proyecto que modifique contratos o concesiones existentes.	Comportamiento inadecuado	Límites de la ley
<i>Señalan que no pueden presentarse iniciativas privadas que correspondan a un proyecto que al momento de su radicación modifiquen contratos o concesiones existentes.</i>	<i>Si se presenta una iniciativa privada en la cual el originador del proyecto o alguno de los vinculados económicos, ostente la condición de contratista, socio o miembro de la estructura plural conformada para ejecutar un proyecto que contemple, o incluya total o parcialmente infraestructura considerada en la iniciativa privada propuesta.</i>	<i>Deben observarse los límites que establece la Ley a la participación de las entidades públicas en las APP de iniciativa privada. Como por ejemplo en proyectos de infraestructura vial que tratándose de carreteras dicho porcentaje no podrá ser superior al 20% del presupuesto estimado de inversión del proyecto, considerado en la etapa de prefactibilidad y factibilidad, respectivamente.</i>
Varias iniciativas sobre un mismo proyecto	Planeación sectorial	Mecanismo líquido
<i>Señala que cuando existan varias iniciativas privadas sobre un mismo proyecto ya radicado, las demás iniciativas sólo podrán ser estudiadas si el primer proyecto es declarado inviable o rechazado</i>	<i>Para la etapa de prefactibilidad, la entidad debe analizar en primer lugar si el proyecto es de interés público. La entidad competente deberá verificar si el proyecto se ajusta a las políticas sectoriales, a los planes de mediano y largo plazo del sector.</i>	<i>Todas las iniciativas privadas que no requieran el desembolso de recursos públicos deberán contar con al menos un mecanismo líquido destinado para la atención de riesgos a cargo de la Entidad Estatal.</i>

Teniendo en consideración lo anterior, al ser una iniciativa privada, se debe hacer énfasis también en los siguientes criterios:

- Coordinación entre entidades:** Una iniciativa privada puede afectar diversos sectores y regiones por lo que es necesario tener un criterio unánime entre las diversas entidades competentes y mecanismos de coordinación. Solo la entidad pública se encuentra en capacidad de decidir si es competente o no para evaluar la iniciativa y para convocar otras entidades implicadas para garantizar que el proyecto sea evaluado teniendo en cuenta diversos planes de gobierno.

Los estructuradores del proyecto deben tener total claridad sobre la competencia de las entidades públicas implicadas en el mismo. Sin embargo, en grandes proyectos de infraestructura es posible que varias entidades puedan tener competencia sobre tramos o ámbitos del proyecto, por lo cual, podrían recibir al mismo tiempo iniciativas privadas para la realización de la misma Asociación Público-Privada o deben buscar mecanismos de coordinación para lograr viabilizar una iniciativa pública con competencias compartidas.

En una iniciativa privada la entidad que recibe la propuesta es la encargada de consultar a las

otras entidades públicas que considere pueden tener competencia sobre la realización del proyecto respecto de su interés en la realización del mismo. En tal caso es necesario implementar algún mecanismo de coordinación que permita el correcto estudio del proyecto. Si no es posible contar con el interés que permita de todas las entidades involucradas dicha circunstancia, podría ser razón suficiente para rechazar la iniciativa.

Si la iniciativa es del interés de todas las partes, las iniciativas pueden ser analizadas siguiendo los lineamientos del Decreto 438 de 2021. No obstante, las respectivas entidades deben ponerse de acuerdo sobre el alcance y particularidades del proyecto en caso de que hayan recibido diversas iniciativas con objetos contractuales similares.

Si existen varias entidades comprometidas en la ejecución del proyecto, la coordinación entre ellas constituye un elemento fundamental para el éxito del mismo. En algunos casos, una solución ideal es la creación de nuevas entidades con el objeto social de trabajar específicamente en el desarrollo de la APP, en las cuales sean socios todas las entidades implicadas en el futuro proyecto. En otros proyectos más pequeños una entidad puede tomar el liderazgo del proyecto siempre y cuando cuente con los requisitos necesarios para cumplir con esta función (en términos presupuestales, técnicos y jurídicos).

Adicionalmente, el ámbito de acción institucional de un proyecto de APP en la mayoría de los casos involucran a más de una entidad y/o servicio público. Las soluciones técnicas pueden tener diferentes posiciones; por lo tanto, se considera significativo identificar las posiciones de las diferentes entidades involucradas respecto al proyecto para optimizarlo y mejorarlo.

- b. **Monto de inversión:** En caso de que la propuesta sea de interés público, se verificará el cumplimiento de los requisitos señalados en el párrafo 1 del artículo 3 de la Ley 1508 de 2012, así como lo dispuesto en los artículos 2.2.2.1.5.1 al 2.2.2.1.5.4 del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015.

Información a presentar por el originador¹

Dicho lo anterior, en esta etapa el originador de la iniciativa privada presentará ante la entidad estatal competente como mínimo la siguiente información:



- Nombre del originador y descripción completa del proyecto
- Alcance del proyecto
- Diseño mínimo en etapa de prefactibilidad
- Especificaciones del proyecto
- Costo estimado

Evaluación de la etapa de prefactibilidad y respuesta

De acuerdo con la regulación vigente, la entidad pública tiene 3 meses para estudiar la viabilidad de la iniciativa privada y emitir un concepto. Si el concepto es favorable, el socio privado iniciará el desarrollo de la etapa de factibilidad de la estructuración del proyecto. Si es desfavorable, la entidad rechazará la iniciativa.

Tener siempre en consideración que el rechazo de una APP de iniciativa privada produce la

¹ El detalle de la información a presentar se encuentra en el Decreto 438 de 2021

consecuencia de que se priorice para el estudio la APP de iniciativa privada que se haya radicado sobre el mismo proyecto en el orden cronológico subsiguiente.

Una vez verificado si el proyecto se ajusta a las políticas públicas y si no se presenta ninguna de las causales de rechazo, la entidad estatal competente solicitará al Departamento Nacional de Planeación en el caso de proyectos a cargo de una entidad del orden nacional o a la entidad de planeación de la respectiva entidad territorial, tratándose de proyecto a cargo de una entidad territorial sus conceptos o recomendaciones sobre el proyecto con fundamento en la información suministrada por la entidad pública, en particular, si éste reúne las condiciones que permite inferir que podría desarrollarse bajo el esquema de APP. Este concepto deberá ser solicitado previamente a la aceptación de la prefactibilidad.

Si existe interés público en el proyecto presentado, la entidad estatal competente deberá surtir los siguientes procesos:

- Consultar los antecedentes con otras entidades estatales y realizar con terceros las consultas que considere necesarias.
- Enviar al originador de la propuesta, una comunicación indicando si la propuesta, al momento de ser analizada, es de interés de la entidad competente. El plazo para el envío será de hasta 3 meses posterior a la recepción del proyecto en etapa de prefactibilidad.
- La entidad deberá pronunciarse sobre la suficiencia y solidez de la información suministrada en cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 438 de 2021.
- La entidad estatal deberá indicar si considera o no de interés público el proyecto.

2.2.2. Etapa de estudios de factibilidad del proyecto

En la etapa de factibilidad se profundizan los análisis y la información básica con la que se contaba en etapa de prefactibilidad, mediante investigaciones de campo y levantamiento de información primaria, buscando reducir la incertidumbre asociada al proyecto, mejorando y profundizando en los estudios y ampliando la información de los aspectos técnicos, financieros, económicos, ambientales, sociales y legales del proyecto.

Información a presentar por el originador²

El originador del proyecto deberá presentar como mínimo la siguiente información:



² El detalle de la información a presentar se encuentra en el Decreto 438 de 2021 Etapa de Factibilidad.

- Documentos que acrediten su capacidad financiera y que acrediten la experiencia en inversión o de estructuración de proyectos para desarrollar el proyecto.
- Alcance del proyecto.
- Identificación, tipificación, estimación y asignación definitiva de los riesgos del proyecto: El originador privado deberá presentar una propuesta de asignación de riesgos y distribución de riesgos de acuerdo con: (i) el artículo 4to de la Ley 1508 de 2012 y (ii) los lineamientos de política de riesgos de los documentos CONPES que les sean aplicables. Dentro de la propuesta de asignación de riesgos, el originador deberá presentar un informe que sustente el análisis realizado sobre cada uno de los riesgos del proyecto y la justificación por la cual considera que la asignación propuesta es la asignación más eficiente.
- Análisis financiero.
- Estudios actualizados de factibilidad técnica, económica, ambiental, predial, financiera y jurídica del proyecto y diseño arquitectónico.
- Minuta del contrato y anexos.

Evaluación de la etapa de factibilidad y respuesta

Entregada la iniciativa en etapa de factibilidad, la entidad estatal competente deberá efectuar la revisión y análisis de la iniciativa presentada y solicitar, si fuera el caso, al originador los estudios adicionales o complementarios y ajustes o precisiones al proyecto. El privado tiene por ley hasta 2 años para la presentación del proyecto ante la entidad pública en etapa de factibilidad.

La entidad pública dispone de seis (6) meses para evaluar los estudios de factibilidad del proyecto. Durante este tiempo la entidad podrá solicitar al ente privado estudios adicionales, ajustes o precisiones al proyecto que considere necesarios los cuales prorrogarán el plazo máximo de análisis hasta por tres (3) meses más. Las entidades pueden contratar asesores con experiencia en el análisis de proyectos para determinar si los estudios del privado son adecuados/suficientes frente al proyecto propuesto.

Aceptación de la iniciativa privada

Se comunica al originador de la propuesta informándole las condiciones para la aceptación del proyecto. Estas condiciones incluyen el monto que acepta como valor de los estudios realizados, el cual debe corresponder a precios del mercado para estudios similares. El socio privado tiene 2 meses para llegar a un acuerdo con la entidad pública sobre las condiciones propuestas.

Iniciativas privadas que requieren desembolsos de recursos públicos

Logrado el acuerdo entre la entidad estatal competente y el originador de la iniciativa, pero requiriendo la ejecución del proyecto desembolsos de recursos públicos, se abrirá una licitación pública para seleccionar el contratista que adelante el proyecto que el originador ha propuesto, proceso de selección en el cual quien presentó la iniciativa tendrá una bonificación en su calificación entre el 3 y el 10% sobre su calificación inicial, dependiendo del tamaño y complejidad del proyecto, para compensar su actividad previa, en los términos que señale el reglamento.

Iniciativas privadas que no requieren desembolsos de recursos públicos

En caso de ser aprobada por parte de la entidad estatal competente una iniciativa privada que no requiere desembolsos de recursos públicos, dicha entidad estatal publicará en la página web del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) el acuerdo de la iniciativa privada, los estudios y la minuta del contrato y sus anexos por el término de cuatro (4) meses, el cual podrá prorrogarse a solicitud de los interesados, si la entidad estatal competente lo estima conveniente hasta por dos (2) meses más."

Rechazo de la Iniciativa Privada

La entidad pública tendrá la opción de adquirir los estudios del proyecto que considere de utilidad. Esta herramienta permite acelerar el proceso de estructuración en proyectos que debido a sus condiciones no cumplen con los requisitos legales para ser desarrollados a través de una APP de iniciativa privada pero debido a su utilidad y carácter estratégico pueden realizarse bajo una APP de iniciativa pública u otra modalidad de ejecución contractual.

2.3. Pasos por seguir en proyectos de iniciativa privada

Para realizar el análisis de elegibilidad de un proyecto de iniciativa privada, es necesario que la entidad cuente con la suficiente capacidad técnica para realizar la evaluación de los productos entregados por el originador del proyecto.

La mayoría de las entidades no cuentan con los recursos propios para realizar estas labores, razón por la cual se deben contratar asesores externos con experiencia en materia de estructuración y análisis de los proyectos. El siguiente es un resumen de los pasos que la entidad necesita realizar para realizar esta contratación:

Confirmación de los recursos necesarios para financiar la validación de la estructuración del proyecto

La primera tarea de la entidad será garantizar la disponibilidad de recursos para contratar a la entidad que apoyará la validación de la estructuración del proyecto.

Para el efecto, de conformidad con el artículo 116, Ley 1955 de 2019, el originador deberá aportar, según corresponda:

- El equivalente a 500 SMLMV en caso de proyectos cuyo presupuesto estimado de inversión sea inferior a 400.000 SMLMV, calculado en precios constantes al momento en que la entidad pública competente una vez finalizada la etapa de prefactibilidad manifiesta que el proyecto es de su interés, o
- El equivalente al 0,1% del presupuesto estimado de Inversión para proyectos cuyo presupuesto estimado de inversión sea igual o superior a 400.000 SMLMV, calculado en precios constantes al momento en que la entidad pública competente una vez finalizada la etapa de prefactibilidad manifiesta que el proyecto es de su interés.

La administración y manejo de los recursos aportados por el originador destinados a la revisión y/o evaluación del proyecto en etapa de factibilidad se realizará a través de un patrimonio autónomo que constituirá el originador. Los costos que genere la administración de dicho patrimonio autónomo deberán ser cubiertos por el originador de la iniciativa privada.

La entidad estatal encargada de la revisión y/o evaluación del proyecto será la beneficiaria del patrimonio autónomo y la encargada de autorizar la celebración de los contratos requeridos para el efecto, así como autorizar los pagos a que hubiere lugar en desarrollo de estos.

El costo estimado de la evaluación del proyecto en la etapa de factibilidad deberá girarse al patrimonio autónomo en el plazo establecido por la entidad al momento de pronunciarse sobre el mismo una vez finalizada la etapa de prefactibilidad. En caso de que el originador no consigne el valor de la evaluación del proyecto la entidad estatal no adelantará su respectiva evaluación.

Finalizada la evaluación del proyecto, se procederá a la liquidación del patrimonio autónomo y sus excedentes si los hubiere serán consignados a orden del tesoro nacional.

Conformación del equipo del proyecto

La complejidad y escala de la mayoría de los proyectos de APP justifica usualmente la conformación de un equipo de proyecto en la entidad en el que se unan los diversos especialistas implicados en el proyecto y se realice una supervisión consolidada de todos los aspectos del proceso.

Una forma común de implementar este principio es a través de **comités** y de la creación de un

equipo de administración del proyecto. Los comités están conformados por los funcionarios de alto rango encargados de supervisar el correcto desarrollo del proyecto. El equipo de administración del proyecto es responsable de realizar las labores administrativas para la ejecución del proyecto, incluyendo la supervisión directa sobre los validadores. Este equipo debe tener un líder (jefe del proyecto) el cual deberá tener amplios conocimientos en materia de contratación pública y de la ley de APP.

Realización de los estudios y documentos previos para el concurso de méritos. Decreto 734 de 2012

Antes de iniciar el proceso de contratación de la firma de valoración de la estructuración, la entidad debe realizar los estudios y documentos previos al concurso de méritos definidos por el artículo 2.11 del decreto 734 de 2012.

Estos pliegos pueden tomar entre dos o tres meses en estar terminados. En ellos se expondrán y justificarán el objeto, el valor estimado, la modalidad de contratación, y los factores de selección de los contratistas entre otras variables.

Realizar el proceso para contratar a la firma de apoyo de valoración de la iniciativa privada

El artículo 33 de la Ley 1508 de 2012 permite que los contratos para apoyar la validación de las APP se puedan contratar mediante el procedimiento de selección abreviada de menor cuantía o mínima cuantía según su valor. Aunque por celeridad del proyecto las entidades tienden a escoger la modalidad más expedita, vale la pena recordar que las modalidades que garantizan mayor participación de oferentes como la licitación usualmente logran mejores condiciones de contratación en términos de calidad y precios.

Contenido del contrato con el asesor de apoyo a la validación de la estructuración del proyecto

Las actividades mínimas que deben ser realizadas por las entidades que apoyan la valoración de una iniciativa privada, son las necesarias para validar los productos a los que se hace referencia en el artículo 2.2.2.1.5.2 (para la etapa de prefactibilidad) y 2.2.2.1.5.5. (Etapa de factibilidad) del Decreto 1082 de 2015.

Son de especial importancia los siguientes productos que son específicos de esta modalidad de ejecución, los cuales serán objeto de mayor profundidad en el siguiente capítulo de esta guía y que se apartan de los tradicionales estudios técnicos, legales y financieros de otras modalidades de contratación:

- Mecanismos de pago.
- Batería de Indicadores para medir los resultados. Lo cual incluye Indicadores de disponibilidad y desempeño. (Niveles de servicios y estándares de calidad)
- Justificación de la modalidad de ejecución de proyecto de conformidad con las resoluciones del DNP sobre la materia.
- Propuesta de financiamiento del proyecto.
- Valoración de vigencias futuras

- Estudios de bancabilidad, comerciabilidad y labores comerciales.
- Valoración y distribución de los riesgos del proyecto, incluyendo obligaciones contingentes.
- Mecanismos de administración del contrato

Elaborar un plan de trabajo y un cronograma

El grupo de trabajo del proyecto debe definir un plan de ejecución del mismo y establecer un cronograma claro de sus etapas. En todo momento la entidad debe tener claridad de los pasos a seguir y el estado actual de los diversos procesos. La entidad debe tener cuidado con ser demasiado optimista con los posibles tiempos y costos del proyecto, por lo cual se sugiere se realicen ejercicios que incorporen correcciones.

Identificar a los actores clave, relacionamiento con ellos y el Plan de Cambio Organizacional

Se recomienda que la entidad pública identifique todos los grupos sociales de interés que pueden verse afectados negativamente por el Proyecto si sus intereses y preocupaciones no se identifican y abordan correctamente. También se deben identificar a los grupos sociales que podrían verse beneficiados por el Proyecto. Además, considerar los impactos en los grupos de interés, analizando cómo los factores de edad, género, discapacidad, raza y otras características de estos grupos pueden verse impactados por el Proyecto. Para este paso es importante contar con un experto en temas de género e inclusión que ayude a realizar este análisis.

Para esto la entidad pública podrá solicitar al originador privado:

- El plan inicial de participación de las partes interesadas.
- Un documento que evidencie el relacionamiento con los grupos de interés y cualquier acuerdo al que se haya llegado, así como la identificación de los riesgos y/o beneficios potenciales.
- Un documento de recomendaciones sobre cómo se pueden usar los resultados de los espacios de consulta con los grupos interesados.
- El plan inicial de Cambio Organizacional.

Desarrollar un Plan Inicial de Cumplimiento de Beneficios

Se debe desarrollar un plan inicial de cumplimiento de beneficios en donde se plantee las siguientes preguntas: ¿Cómo se generará el beneficio? ¿Cómo se medirá el beneficio? ¿Cómo se monitorea la generación del beneficio? El propósito de este plan es analizar y prever los beneficios cuantitativos y cualitativos, se debe tener en cuenta cómo se monitorearán a lo largo de su ejecución y operación, y quien realizará este monitoreo.

Desarrollar una estrategia y plan de manejo de riesgos

Adicional a lo estipulado en la normativa vigente Ley 448 de 1998, se debe desarrollar la estrategia y el plan de manejo general de riesgos del proyecto para la entidad pública. En este plan se deben identificar cuáles son los principales riesgos de la implementación del proyecto para la entidad pública, la estrategia de manejo de riesgos teniendo en cuenta el perfil de cada

riesgo, y un plan general de gestión de riesgos.



Fuente: Banco de Imágenes KPMG